

El C. Lic. Rafael Treviño y Garza, Magistrado del Tribunal de Circuito de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas, así definitivamente juzgando, lo decretó, mandó y firmó, por ante mí. Doy fé.—*Lic. Rafael Treviño y Garza*—*Amado Valdés*, secretario.

Es copia que certifico. Monterey, 30 de Abril de 1874.—*Amado Valdés*, secretario.

Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.

El Procurador interino dice: Que en el Juzgado de Distrito de Matamoros, en 19 de Agosto del año próximo pasado, se inició el presente juicio de comiso contra D. Enrique Sanroman, con el fin de que pague dobles derechos por la excedencia del peso neto de treinta barriles de coñac amparados con el permiso provisional número 55 de 15 de Julio de 1873. Celebrada la junta de ley y corridos los demas trámites del juicio, el mencionado Juzgado de Distrito lo sentenció definitivamente en 7 de Noviembre del mismo año, condenando á D. Enrique Sanroman al pago de \$ 556 6 cs., que importan los dobles derechos de importacion, por la suplantacion indicada. Esta determinacion fué confirmada por sus propios legales fundamentos, en 29 de Abril del corriente año, por el Tribunal de Circuito de Monterey; así es que causó ejecutoria conforme al art. 48 de la Pauta de comisos, de 26 de Octubre de 1842.

El que suscribe, considerando arreglada á derecho esta determinacion, y no encontrando motivo para exigir la responsabilidad á los jueces que intervinieron en este proceso, pide á esta 1ª Sala se sirva darlo por revisado.

México, Junio 3 de 1874.—*Garcia Ramirez*.

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 5 de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José M. Iglesias*.—*M. Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*S. Guzman*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Junio 20 de 1874.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial segundo.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el C. Andrés Campillo, contra la providencia del C. Gobernador del Estado, que lo condenó á sufrir tres meses de prision en defecto de quinientos pesos de multa, por haber publicado un impreso snello en que agravia á aquel funcionario.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor dice: que el C. Andrés Campillo solicita amparo de la Justicia de la Union, contra el hecho de la Gofatura política de la Capital, que lo condenó á una multa de quinientos pesos ó en su defecto un mes de arresto, por la publicacion de la hoja suelta que forma la 1ª de esta pieza, solicitando al mismo tiempo la suspension del acto de prision que lo tenía privado de su libertad; fundando su queja en la infraccion de garantías concedidas en el art. 7º de la Constitucion general de la República, y en la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Ese Juzgado atendiendo á la urgencia notoria y segunda de aquellas peticiones, tuvo á bien declarar la libertad del quejoso y pe-

dir al funcionario acusado el informe previendo en el art. 99 de aquella disposicion. Rendido éste, el C. Gefe político manifiesta, que por disposicion del C. Gobernador del Estado, y con fundamento del art. 21 de la Constitucion general mencionada, fraccion 17 del art. 54 de la del Estado, y art. 644 y 657 del Código penal, impone á Campillo aquella pena por la difamacion ó injurias inferidas al ejecutivo del Estado, en la hoja suelta de que se ha hecho referencia.

Tales fundamentos no los considera legales el Ministerio, por las razones que muy en breve pasa á exponer.

Es verdad que por las prescripciones del art. 21 antes citado y fraccion 17 del 54 referido, la autoridad política ó administrativa bien puede imponer aquellas penas, pero con sujecion y en los casos y modo que determine la ley reglamentaria del mismo. Esta ley pues, no existe ni podrá referirse á otra cosa, sino á que aquella autoridad por medio de tales penas se hiciere obedecer y respetar al ejercer sus funciones, y procurar el cumplimiento de lo que dispusiesen dentro de la esfera de sus atribuciones especiales; por manera que todo lo que fuera de estas castigue ó corrija, solo constituya un abuso y un exceso de facultades; en consecuencia, no existiendo como no existe la disposicion determinativa de los casos á que aquél artículo constitucional se refiere, y siendo que ella no puede dirigirse mas que á corregir la irrespetuosidad y falta de cumplimiento de sus determinaciones, no es aplicable respecto de Campillo, cuyas faltas ó delitos están sugetas á la autoridad de que habla la parte final del art. 79 de la misma Constitucion general, por tratarse de un delito de imprenta, supuesto que esas injurias que se atribuyen al quejoso son causadas por medio de la imprenta. I por lo mismo, la autoridad que debe conocer y aplicar la pena condigna, no es mas que el jurado que califica el hecho y el que designa aquella.

Tampoco son aplicables los arts. 644 y 657 del Código penal á que alude en su informe aquella autoridad política, porque como puede verse, aunque ellos se refieren al medio que se emplea para la injuria, difamacion ó calumnia extrajudicial, por sí mismos suponen y dan á entender que ellas son inferidas fuera de la presencia del Juez, y esto mismo tambien da á entender que la autoridad que debe conocer de tales faltas, es la judicial y no la política ó administrativa; y resulta, que si es que esta es quien ha aplicado la pena impuesta al quejoso, ha obrado indebidamente, porque no es competente ni el delito es de los sugetos á sus atribuciones, con infraccion notoria de las garantías que tambien concede el art. 21 de aquella ley.

En esta virtud, y segun lo expuesto, el Ministerio es de opinion: que ese Juzgado declarando violadas en la persona del C. Andres Campillo las garantías individuales que conceden á los de su clase los arts. 79 y 21 antes referidos, se sirva dispensarle el amparo que solicita por ser de rigurosa justicia, y conforme con lo prevenido en la ley de 20 de Enero de 1869.

Ese Juzgado, sin embargo, acordará lo mas conforme á derecho.

San Luis Potosí, Junio 19 de 1874

Es copia. San Luis Potosí, Junio 2 de 1874.—Gregorio Vazquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Junio 19 de 1874.—Visto el ocurso del C. Andres Campillo, en que pide amparo y proteccion de la Justicia federal, contra la providencia del C. Gefe político del partido de la Capital, que lo condenó á sufrir tres meses de prision, en defecto de quinientos pesos de multa que no pudo enterar, por haber dado á luz un impreso suelto en que infiere agravios á ese funcionario, con cuyo hecho se ha violado en la persona del quejoso la garantía que

sanciona el art. 7º de la Constitución, fundando la queja en la fracción 1ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869; el informe con justificación de la autoridad ejecutora en que expresa que al proceder así ha hecho uso de la facultad que le concede el art. 11 fracción 18 del decreto núm. 39 de la 4ª H. Legislatura del Estado, reglamentario del art. 21 del pacto fundamental, y 54 fracción 17 de la Constitución particular del Estado; el pedimento del C. Promotor fiscal conforme en que se concede el amparo solicitado y lo demás que consta de autos, y

Considerando: que en los asuntos de imprenta y librería solo pueden intervenir ó son competentes los jurados que crea el art. 7º del pacto federal, para calificar los impresos que se denuncien, aplicar el derecho y designar la pena, mediante los procedimientos y formalidades que marca la ley orgánica de la libertad de la prensa, de 4 de Febrero de 1868, lo cual quiere decir que los delitos ó abusos que se cometan por la prensa no pueden ser castigados por la autoridad política ó administrativa, en uso de la atribución que le concede la parte 2ª del art. 21 de la misma Constitución general, porque esta facultad está limitada en el caso especial de abusos de la libertad de imprenta, por el art. 7º del propio Código.

Por lo expuesto, de conformidad con lo pedido por el quejoso y C. Promotor fiscal, y habiéndose el caso comprendido en la fracción 1ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, debia declarar y declarar que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Andres Campillo, contra la providencia que dió origen al presente recurso.

Hágase saber, publíquese y elevense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para su revisión.

Lo decretó y firmó el C. Juez. Doy fé. —Firmado.—*Conrado Díaz Soto.*—*Donaciano Monroy*, secretario.

Es copia. San Luis Potosí, Junio 8 de 1874.—*Donaciano Monroy*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Andres Campillo ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, contra la providencia del C. Gobernador del Estado que lo condenó á sufrir tres meses de prision, en defecto de quinientos pesos de multa, por haber publicado un impreso suelto en que agravia á aquel funcionario, con cuya determinacion se infringe la garantía consignada en el art. 7º de la Constitución. Visto el informe de la autoridad responsable; el pedimento fiscal; la sentencia del inferior, y

Considerando: que la Constitución federal ha querido de un modo absoluto colocar la libertad de imprenta fuera del alcance de toda acción administrativa ó política, por considerarla la garantía mas positiva de los derechos del hombre, instituyendo para los delitos que pueda ocasionar el abuso de esta libertad, un Tribunal escepcional en su art. 7º en su parte 3ª.

Que en consecuencia, ningun motivo por grave y fundado que sea, puede autorizar una violacion de esta prevencion constitucional.

Con fundamento de los arts. 101 y 102, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que amparó al C. Andrés Campillo.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consignantes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón*

Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.
—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre
... de 1874.—*Lic. Emilio Pardo*, oficial
mayor interino.

AMPARO

Interpuesto ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por D. Ramon Solís, contra los procedimientos del C. Juan N. Buendía, que funciona como Juez del crimen en la capital del Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El informe emitido sobre lo principal de este juicio, acredita que el acto reclamado por D. Ramon Solís, procede del Juez de 1ª instancia accidental del Partido de Izamal, que es quien le instruye el proceso que ocasiona su prision, y no el Lic. D. Juan N. Buendía, como equivocadamente sin duda aseguró el actor al ratificar el escrito de queja presentado por su esposa Dª Teodocia López.

Si el Sr. Buendía fuese la persona que estuviese juzgando al quejoso, el Fiscal no vacilaría un solo instante en pedir que se accediese al amparo demandado de V., por que careciendo aquel de toda autoridad en virtud de no tener un origen constitucional y ni siquiera legítimo, como es público y notorio, carece tambien de absoluta competencia para juzgar á nadie, puesto que primero es ser Juez, que ser competente en este ó en el otro negocio; pero el que instruye la causa de D. Ramon Solís, es el de 1ª instancia de Izamal que ejerce accidentalmente estas funciones, como Juez de paz llamado por la ley, en defecto de aquella autoridad propietaria; y si la incompetencia del Sr. Buendía es evidente por las razones que ha indicado el Fiscal, no existe la mis-

ma evidencia respecto de la falta de jurisdicción del Juez de paz de Izamal que juzga á Solís, por que no consta que proceda de la eleccion simulada de esa clase de funcionarios, dispuesta por la minoría arbitraria de la actual Legislatura de este Estado, de que derivan su falso título los jueces de 1ª instancia, ni de la declaracion que esa misma minoría hubiese hecho en un decreto esencialmente apócrifo, con el objeto de revestirlos de una autoridad que solo podia ser legítima y constitucional, emanando del libre sufragio del pueblo yucateco, por las vias y formas que señala su constitucion particular. El actor pues, ha debido probar una de dos cosas: ó que quien lo está juzgando es el Lic. D. Juan N. Buendía, para reconocer desde luego la procedencia del amparo por la pública notoriedad de su incompetencia, ó que el Juez de paz de Izamal, que por ministerio de la ley del Estado funciona como de 1ª instancia de aquella ciudad, y que es el que realmente lo juzga, padece tambien de los vicios radicales apuntados, que anulan por completo su aparente jurisdicción.

Probado que hubiese sido cualquiera de estos dos extremos, el Fiscal necesariamente pediría el otorgamiento del recurso intentado, porque con el hecho que lo motiva, se violaría el art. 16 de la Constitucion de la República; pero aun en este caso, el amparo no produciría el efecto que sin duda se propone el quejoso, de volver al pleno goce de su libertad, pues existiendo en todo su vigor el auto formal de su prision, que no niega se haya proveido en tiempo oportuno ó por autoridad competente, todo lo que podría suceder, sería que dejase de juzgarlo quien lo juzga hoy sin competencia alguna, quedando paralizada su causa mientras hubiese Juez legítimo que la siguiera, pues ni era posible hacer que se le dejase libre, sin desvirtuar el auto expresado de su encarcelacion, por el gravísimo delito que se determina en el adjunto informe, corroborado por la fama pública, ni debería expo-